



00000012

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

DICTAMEN No. 01-2017

INICIATIVA 5148

**INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO NÚMERO
51-92 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, CÓDIGO PROCESAL PENAL**

HONORABLE PLENO

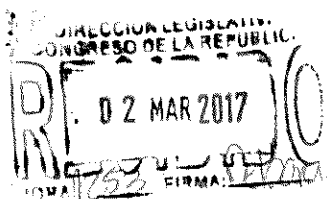
ANTECEDENTES

Con fecha seis de octubre de dos mil dieciséis, el Honorable Pleno del Congreso de la República conoció y remitió a esta Comisión para su estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa de Ley con registro **5148**, la cual fue recibida en esta Comisión el día trece de octubre del dos mil dieciséis, misma que fue presentada por los representantes al Congreso de la República; Juan Ramón Lau Quan, Felipe Alejos Lorenzana y compañeros, dicha Iniciativa dispone aprobar Reformas al Código Procesal Penal, Decreto Número 51-92 del Congreso de la República.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa 5148 promueve: Las reformas al Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del Congreso de la República, se integra por tres artículos, los cuales abarcan los siguientes Contenidos:

- Se reforma el artículo 268 del Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del Congreso de la República, en el cual:
 1. Se delimita que por una sola vez se podrá pedir la prórroga de los plazos de Prisión Preventiva, la cual no podrá exceder de seis meses.



[Firma manuscrita]



00000013

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

2. Que los procesos sometidos a Competencia de los Juzgados de Paz se podrán prorrogar por una sola vez.
 3. Se persigue la reparación del daño como la última fase de un ciclo que completa la justicia y la verdad en los casos de violaciones a derechos humanos.
 4. El fin de la reparación integral del daño es restaurar la situación como estaba antes de la violación de derechos humanos.
- Se adiciona el artículo 521 bis, en el cual:
 1. Al haberse ordenado la libertad por desistimiento, sobreseimiento o archivo, el Estado de Guatemala, o el querellante adhesivo en su caso, indemnizará al procesado con cincuenta salarios mínimos vigentes para actividades no agrícolas y se publicara por lo menos en dos diarios de mayor circulación, incluyendo las circunstancias por las cuales se ordena la indemnización.
 2. La indemnización también procederá por el Estado de Guatemala o el querellante adhesivo al procesado que fuere absuelto en sentencia firme ejecutoriada con cien salarios mínimos, la indemnización solo procederá cuando no haya existido dolo por parte del procesado para guardar prisión o haber sido procesado; de igual manera se publicara por lo menos en dos diarios de mayor circulación del País, describiendo las circunstancias por las cuales se ordena la indemnización.

CONSIDERACIONES LEGALES Y CONSTITUCIONALES

Los ponentes de la iniciativa en su exposición de motivos expresan que con base en la Constitución Política de la República de Guatemala y los tratados internacionales de carácter procesal y de Derechos Humanos, deben ser observados rigurosamente los principios Constitucionales y Procesales, en la persecución, juzgamiento y sanción de delinquentes mismos. El sistema de Justicia opera, en consecuencia, dentro del marco de



00000014

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

otro sistema: el de garantías, que establece principios básicos creados por la sociedad para regular el poder punitivo del Estado, como ente soberano e independiente.

La Constitución Política de la República de Guatemala, contiene un catálogo de derechos fundamentales de las personas; entre los que se encuentran las denominadas garantías procesales, cuya función es asegurar una justicia expedita, humana, practicada en plazos razonables y coherentes con lo establecido con la ley vigente, así también con la participación profesional de jueces independientes e imparciales y con absoluto respeto de la dignidad humana. La fuerza obligatoria de los derechos fundamentales es controlada por la Corte de Constitucionalidad, en primer lugar y directamente en los casos concretos. La Iniciativa señala de forma precisa el postulado Constitucional en el que el Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es y será la realización del bien común y su deber es garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de las personas, tomando preeminencia a este dictado Constitucional como una fuente que brinda y dota de mecanismos para hacer prevalecer los principios de celeridad, oralidad, inmediación, publicidad, contradictorio y debido proceso, promoviendo que el debido proceso sea transparente, breve, concreto y desprovisto de formalismos innecesarios y reglas poco realistas; aunado a lo anterior el Código Procesal Penal considera la necesidad de garantizar la pronta y efectiva justicia penal, con lo cual, se busca asegurar la paz, la tranquilidad; la seguridad ciudadana, así como el respeto a los derechos humanos inherentes a la persona y la efectiva persecución de los delincuentes y la sanción de las conductas que lesionan los bienes jurídicos, sociales e individuales de los guatemaltecos es una de las prioridades y demandas sociales más urgentes y necesarios.

El Código Procesal Penal regula una serie de principios procesales que resguardan a todo sindicado, procesado, acusado o condenado en el momento de llevar a cabo un procedimiento penal en su contra y durante todo el tiempo que dure privación de libertad, a través de regulaciones específicas tales como el recurso de Revisión, mismo que establece que cuando el condenado fuere absuelto o se le impusiere una pena menor, será indemnizado en razón de tiempo de privación de libertad o inhabilitación sufrida, o por lo sufrido en exceso, salvo que haya provocado su propia persecución, al denunciarse



00000015

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

falsamente a sí mismo, confesare un acto inexistente, u ocultare o alterare dolosamente la prueba que condujo al error judicial. El precepto rige, análogamente, para el caso de que la revisión tenga por objeto una medida de seguridad y corrección. La multa o su exceso será devuelta." No obstante el precepto citado, no se determina, especifica o cuantifica la indemnización que deberá hacer el Estado ante los daños causados al individuo, que como procesado ha tenido que enfrentar, tales como: el menoscabo de su dignidad, desgaste económico, estigmatización de la sociedad y hasta una posible desintegración familiar o pérdida de empleo. Asimismo, cabe resaltar el gasto económico que le genera al Estado es cada vez mayor.

En razón de lo anterior El Código Procesal Penal también regula en su artículo 268 Cesación del Encarcelamiento, que: ***"Las salas de la Corte de Apelaciones de la República, en los casos sometidos a su conocimiento a solicitud de los jueces de Paz, jueces de Instancia o Tribunales de Sentencia o del Ministerio Público, conocerán, y en su caso autorizarán cuantas veces sea necesario, la prórroga de los plazos de prisión preventiva que establece el Código, fijando en todo caso, el plazo de la prórroga concedida."*** A lo largo del artículo anteriormente señalado, estas prórrogas de plazos relacionados a la prisión preventiva del procesado, se pueden otorgar en repetidas ocasiones, dejando abiertas las posibilidades de conceder la ampliación de la prisión preventiva y los motivos por los cuales se concederán; lo que viola el principio de garantía de prontitud que este ordenamiento jurídico debe perseguir.

Durante los últimos años, los procesos penales se han caracterizado por ser innecesariamente prolongados a causa de Recursos que se interponen y estancan los procesos, promoviendo la tardía y pronta aplicación de justicia, en la actualidad Guatemala vive un proceso de modernización política, cuyo objetivo es la construcción y funcionamiento de un Estado de Derecho, Democrático, capaz de garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y libertades individuales y la realización del bien común, en un ambiente de seguridad, paz social y convivencia digna que garantice a los ciudadanos el respeto a sus derechos plenamente.

El Sistema Penitenciario actual no responde a las necesidades de modernización estatal por lo que necesita la conformación de una política criminal encaminada a permitir la



00000016

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

persecución efectiva y la sanción oportuna de los delincuentes, y a la indemnización de éstos, al ser liberados conforme a las circunstancias que se determinen, en el marco de los derechos Constitucionales, por lo cual toda persona declarada inocente respecto de una imputación por la que hubiese sido privada de su libertad de manera infundada o que se revele irracional en el curso del proceso, tendrá derecho a que el Estado, de acuerdo con la ley, le indemnice el daño sufrido a causa de su privación de libertad.

**CONSIDERACIONES DE CONSTITUCIONALIDAD
Y DERECHO INTERNACIONAL.**

Para el maestro de Derecho Penal José García Falconi, la detención arbitraria existe cuando un condenado luego de cumplir la pena impuesta continua privado de su libertad o en aquellos casos en los que a pesar de cumplir los requisitos formales para limitar la libertad de las personas, se afectan a derechos fundamentales, es decir privaciones de libertad que terminan con un auto de sobreseimiento, desistimiento, archivo o con sentencia absolutoria, dejando en claro que la obligación de indemnizar tiene sustento en que una persona inocente no debe asumir una carga pública que afecte injustificadamente sus derechos y si en los hechos ha sucedido así, el Estado tiene la responsabilidad de reparar los perjuicios ocasionados a consecuencia de su obrar.

Por otro lado la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 10 establece: **"Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial"**.

Finalmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo 14.6 lo siguiente: **"Cuando una sentencia firme haya sido ulteriormente revocada o el condenado haya sido indultado por haber sido producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada conforme a la ley, a menos que se le demuestre que le es imputable en todo o en parte de el no haberse revelado el hecho desconocido."**

RT



00000017

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

DICTAMEN

La Comisión de Legislación y puntos Constitucionales del Congreso de la República de Guatemala al tenor del análisis y consideraciones manifestadas, así como de las diferentes posturas que fueron escuchadas considera emitir **DICTAMEN FAVORABLE** a la Iniciativa **5148** para que esta sea sometida a consideraciones del Pleno de la República y este decida como en derecho corresponda, en razón de que toda persona declarada inocente respecto de una imputación por la que hubiese sido privada de su libertad de manera infundada o que se revele irracional en el curso del proceso, tendrá derecho a que el Estado, de acuerdo con la ley, le indemnice el daño sufrido a causa de su privación de libertad.

Dado en la sala de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República, en la ciudad de Guatemala el día dos de marzo del año dos mil diecisiete.

Fidel Reyes Lee
Vicepresidente

~~Cornelio Gonzalo García García~~
Presidente

Mayra Alejandra Carrillo De León
Secretaria

Ronald Estuardo Arango Ordoñez

Leonardo Camey Curup



00000018

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

Juan Manuel Díaz-Durán Méndez

Javier Alfonso Hernández Franco

Juan Ramón Lau Quian

Carlos Enrique López Giron

César Emilio Fajardo Morales

Ana Victoria Hernández Pérez

Fernando Linares Beltranena

Juan José Porras Castillo



00000019

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

DECRETO NÚMERO _____

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que el Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común y su deber es garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de las personas.

CONSIDERANDO:

Que es necesario el establecimiento de mecanismos para hacer prevalecer los principios de celeridad, oralidad, inmediación, publicidad, contradictorio y debido proceso, promoviendo que el procedimiento sea transparente, breve, concreto y desprovisto de formalismos innecesarios y reglas poco realistas.

CONSIDERANDO:

Guatemala vive un proceso de modernización política, cuyo objetivo es la construcción y funcionamiento de un Estado de Derecho, democrático, capaz de garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y libertades individuales y la realización del bien común, en un ambiente de seguridad, paz social y convivencia digna.

CONSIDERANDO:

El Decreto Legislativo 51-92 del Congreso de la República que contiene el Código Procesal Penal de la República de Guatemala (y las cinco reformas efectuadas, en los decretos legislativos 45-93, 32-96, 103-96, 114-96 y 79-97) responde a las necesidades de modernización estatal y a la conformación de una política criminal encaminada a permitir la persecución efectiva y la sanción oportuna de los delincuentes, y a la indemnización de éstos, al ser liberados conforme a las circunstancias que se determinen, en el marco de los derechos Constitucionales.



00000020

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

CONSIDERANDO:

La Constitución Política de la República de Guatemala y los tratados internacionales de carácter procesal y de Derechos Humanos, deben ser observados rigurosamente en la persecución, juzgamiento y sanción de delincuentes. El sistema de Justicia opera, en consecuencia, dentro del marco de otro sistema: el de garantías, que establece principios básicos creados por la sociedad para regular el poder punitivo del Estado.

CONSIDERANDO:

Nuestra Carta Magna contiene un catálogo de derechos fundamentales de las personas; entre los que se encuentran las garantías procesales, cuya función es asegurar una justicia expedita, humana, practicada en plazos razonables, con jueces independientes e imparciales y con absoluto respeto de la dignidad humana. La fuerza obligatoria de los derechos fundamentales es controlada por la Corte de Constitucionalidad, pero también, en primer lugar y directamente en los casos concretos.

POR TANTO:

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal "a" de la Constitución Política de la República de Guatemala;

Se decreta, las siguientes:

**REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 51-92 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA,
CÓDIGO PROCESAL PENAL**

Artículo 1. Se reforma el artículo 268 del Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del Congreso de la República, el cual queda de la siguiente manera:

"Artículo 268: Cesación del Encarcelamiento. La privación de la libertad finalizará:

- 1) cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente su sustitución por otra medida.

re



00000021

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

- 2) Cuando su duración supere o equivalga a la condena que se espera, considerando, incluso, la posible aplicación de las reglas penales relativas a la suspensión o remisión de la pena, o a la libertad anticipada.
- 3) Cuando su duración exceda de un año; pero si se hubiere dictado sentencia condenatoria pendiente de recurso, podrá durar tres meses más.

Las salas de la Corte de Apelaciones de la República, en los casos sometidos a su conocimiento a solicitud de los jueces de Paz, jueces de Instancia o Tribunales de Sentencia o del Ministerio Público, conocerán, y en su caso autorizará **por una sola vez** la prórroga de los plazos de prisión preventiva que establece el Código, fijando en todo caso, el plazo de la prórroga concedida, el cual no podrá exceder de seis meses.

En ningún proceso sometido a la competencia de los juzgados de Paz la prórroga a que se refiere el presente artículo se podrá otorgar por **una sola vez**.

En los procesos en que se hubiere dictado sentencia condenatoria, la prisión preventiva podrá prolongarse durante la tramitación y resolución del recurso de apelación especial.

La Corte Suprema de Justicia, en los casos sometidos a su conocimiento, de oficio o a solicitud de la Salas de la Corte de Apelaciones o del Ministerio Público, podrá autorizar, en los casos de su competencia que los plazos anteriores se prorroguen por **una sola vez, fijando el tiempo concreto de la prórroga**. En este caso podrá indicar las medidas necesarias para acelerar el trámite del procedimiento y quedará a su cargo el examen de la prisión, el cual no podrá exceder de seis meses."

Artículo 2. Se adiciona el artículo 521 bis al Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del Congreso de la República, el cual queda así:

Artículo 521 bis. Indemnización.

1. Habiéndose ordenado la libertad del procesado mediante desistimiento, sobreseimiento o archivo, el Estado de Guatemala, o el querellante adhesivo en su caso, indemnizará al procesado con cincuenta salarios mínimos, salario mensual vigente para las actividades no agrícolas, el salario se regirá según lo establecido



00000022

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y se publicará por lo menos en dos diarios de mayor circulación en el país, incluyendo las circunstancias por las cuales se ordena dicha indemnización.

2. Así mismo se indemnizará al procesado por parte del Estado de Guatemala, o el querellante adhesivo en su caso, quien fuere absuelto en sentencia firme debidamente ejecutoriada con cien salarios mínimos, salario mensual vigente para las actividades no agrícolas, el salario se regirá según lo establecido por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y se publicará por lo menos en dos diarios de mayor circulación en el país incluyendo las circunstancias por las cuales se ordena dicha indemnización.

Dicha indemnización será cancelada, siempre y cuando no haya existido dolo por parte del procesado para guardar prisión o haber sido procesado.

Artículo: 3. El presente Decreto entrará en vigencia treinta días hábiles siguientes a su publicación en el Diario Oficial.

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL _____ DE 2017.

A small, stylized handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.